

**IEEBC-CG-PA08-2020**

**PUNTO  
DE ACUERDO**

**CONSEJO GENERAL ELECTORAL  
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA  
P R E S E N T E.**

El suscrito Consejero Presidente Provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 47, fracciones I, y V, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; respetuosamente someto a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente **PUNTO DE ACUERDO** por el que se "APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA LA PRESENTACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD O SOLICITUDES DE REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL SOBRE EL DECRETO NÚMERO 74, EMITIDO POR LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, POR UN PERIODO DE TREINTA DÍAS HÁBILES, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV 2 (COVID-19)" bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos.

**G L O S A R I O**

*Consejo General*

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

*Constitución General*

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

*Constitución Local*

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

*COVID-19*

Virus SARS-CoV 2

*Instituto Electoral*

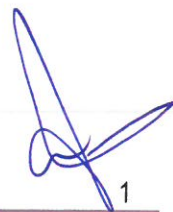
Instituto Estatal Electoral de Baja California.

*Ley Electoral*

Ley Electoral del Estado de Baja California.

*Ley de Participación Ciudadana*

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.



1

**ANTECEDENTES**

**1. Expedición Ley de Participación Ciudadana y sus reformas.** El 16 de febrero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la *Ley de Participación Ciudadana*, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la *Constitución Local* y tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos.

Así mismo, mediante los decretos 85, 276, 160 y 165 publicados en el Periódico Oficial del Estado en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de septiembre de 2012, 19 de enero, y 9 de marzo de 2018, respectivamente, se han llevado a cabo diversas reformas a la *Ley de Participación Ciudadana*, que en lo sustancial versan sobre los siguientes temas:

- a) La disminución de porcentajes para solicitar los instrumentos de participación ciudadana, el establecimiento del voto electrónico para llevar a cabo la jornada de consulta, y la realización de consultas en día de las elecciones ordinarias;
- b) La incorporación a la ley como instrumento de participación ciudadana tanto de la consulta popular como del presupuesto participativo;
- c) La facultad de las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior para que puedan presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso del Estado, y
- d) Se incorpora la figura del Presupuesto Participativo como instrumento de participación ciudadana a nivel municipal.

**2. Reforma constitucional 2014.** El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la *Constitución General* en materia político-electoral, que, entre otros aspectos, previó un sistema nacional de organización de las elecciones, depositando la función electoral en el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, para lo cual, estableció una distribución competencial entre ambas autoridades.

**3. Reforma constitucional local 2014.** El 17 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 112 del Congreso del Estado por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la *Constitución Local* en materia político electoral, la cual estableció la creación del *Instituto Electoral* como órgano constitucional autónomo y definió como una de sus actividades integrales la



relacionada con la organización de los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en la *Constitución Local* y la *Ley de Participación Ciudadana*.

**4. Expedición Ley Electoral 2015.** El 12 de junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el decreto 293 del Congreso del Estado, mediante el cual se expidió la *Ley Electoral*, misma que tiene por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad al ejercicio de la función pública electoral.

**5. Brote COVID-19.** En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por COVID-19, la cual se expandió hasta alcanzar una cantidad importante de países que se han visto afectados.

**6. Aprobación de primer periodo vacacional del *Instituto Electoral*.** El 26 de febrero de 2020, el *Consejo General* durante la primera sesión extraordinaria aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA04-2020 en el que determinó los días de asueto, así como el primer periodo vacacional del personal del *Instituto Electoral* para el ejercicio 2020. Dicho periodo vacacional correría del 20 de julio al 7 de agosto de 2020, por lo cual los días comprendidos se considerarían inhábiles para efectos del cómputo de plazos para la tramitación de cualquier procedimiento no ligado a un proceso electoral.

**7. Declaratoria de pandemia.** El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de COVID-19 es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

**8. Medidas extraordinarias emitidas por el *Instituto Electoral*.** El 19 de marzo de 2020, el *Consejo General* emitió el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA05-2020, por el que se establecieron medidas que garantizaran el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las y los servidores públicos del *Instituto Electoral*, así como a las personas que acudieran a sus instalaciones, con motivo de la pandemia generada por el COVID-19.



**9. Declaratoria de enfermedad grave al COVID-19.** El 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo mediante el cual se reconoció a la epidemia causada por el virus COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria en México, y estableció las actividades de preparación y respuesta a dicha epidemia. El acuerdo fue publicado en la misma data en el Diario Oficial de la Federación.

**10. Medidas preventivas o de mitigación del Gobierno de México.** El 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de México emitió el acuerdo por el cual se establecieron las medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus COVID-19. En el punto segundo del acuerdo referido, se establecieron las medidas siguientes:

- a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c). Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, *diabetes mellitus*, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;
- b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;
- c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de



restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado;

- d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;
- e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y
- f) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

**11. Declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19.** El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el cual declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por COVID-19 y estableció que la Secretaría de Salud del Gobierno de México determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atenderla.

**12. Medidas extraordinarias ante el COVID-19 del Gobierno de México.** El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de México emitió el acuerdo mediante el cual estableció medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, siendo las siguientes:

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

[...]



IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;

V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;

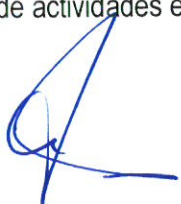
VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México;

VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.

**13. Autorización para sesiones virtuales o a distancia.** El 3 de abril de 2020, el Consejo General durante la tercera sesión extraordinaria aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020, mediante el cual se autorizó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del *Consejo General* y de los demás órganos colegiados del Instituto Electoral, con motivo de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

**14. Estrategia de reapertura y semáforo de riesgo epidemiológico.** El 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.





**15. Designación del Consejero Presidente Provisional.** El 11 de junio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG134/2020 por el que se designó al consejero electoral Jorge Alberto Aranda Miranda como Consejero Presidente Provisional del *Instituto Electoral*, el cual rindió la protesta de ley el 12 de junio de 2020 ante el pleno del *Consejo General*. Lo anterior, en virtud del fallecimiento de Clemente Custodio Ramos Mendoza quien fuera Consejero Presidente del *Instituto Electoral*.

**16. Reanudación de encuestas y censos.** El 17 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se autoriza la reanudación de todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que impliquen la movilización de personas y la interacción física entre las mismas, para lo cual se debe observar el Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19.

**17. Solicitud de suspensión de plazos.** El 10 de agosto de 2020, un grupo de personas que señalaron integrar un colectivo denominado "Ciudadanos en Movimiento X BC" presentaron ante el *Instituto Electoral* un escrito en el que solicitaron se emitiera un acuerdo extraordinario para que no se restrinjan sus derechos y se les permita tener la posibilidad de participar eficazmente en la utilización del instrumento de participación ciudadana que prevé la *Constitución Local* y la *Ley de Participación Ciudadana*, relativo al Referéndum Constitucional, argumentando diversas razones de tipo sanitario.

"Por medio del presente escrito, SOLICITAMOS se emita ACUERDO EXTRAORDINARIO, a efecto de que los ciudadanos residentes de Baja California, en periodo de pandemia por motivos de Covid-19, NO SE NOS RESTRINJAN NUESTROS DERECHOS Y SE NOS PERMITA TENER LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EFICAZMENTE EN LA UTILIZACIÓN DE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA que prevé la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley de Participación Ciudadana de B. C.

[...]

De lo expuesto surge la necesidad de que el IEEBC, emita un acuerdo para que los suscritos y miles de Bajacalifornianos podamos ejercer nuestro derecho de democracia participativa respecto al REFERÉNDUM constitucional relacionado con el decreto número 74, mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 16 de junio de 2020, o para ejercer nuestro derecho respecto a cualquier otra norma que se haya emitido en periodo de pandemia y en orden de restricción y asilamiento social que conlleve la utilización de cualquier instrumento de participación ciudadana.

[...]



La respuesta que emita el IEEBC debe tomar en cuenta la interpretación más favorable a los solicitantes y a miles de Bajacalifornianos, aplicando el principio pro-persona previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución Federal, tomando en cuenta el objeto y los principios rectores de la participación ciudadana, como los acuerdos emitidos por las autoridades de salud, solicitando entre los puntos a tratar en el ACUERDO extraordinario que se emita respecto al REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL que nos ocupa, se consideren los siguientes puntos:

- No corra el computo de los 30 días previsto en el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana de B.C., hasta en tanto se decrete y autorice por las autoridades de salud, la posibilidad de que los ciudadanos podamos asociarnos libremente y sin restricciones por motivos de la pandemia, a efecto de estar en posibilidades de obtener las más de 42 mil firmas para presentar la solicitud de REFERÉNDUM ante el IEEBC, considerando que la norma que se pretende someter a consulta fue publicada el 16 de junio de 2020, en el Periódico Oficial del Estado;
- Que para el periodo de pandemia, se considere implementar medidas tecnológicas para recabar firmas de los residentes Bajacalifornianos, esto ayudara a cumplir con las medidas de salud, evitando contagios o muertes por covid, y podrá apoyar a cumplir con las reglas de sana distancia, evitando aglomeramientos o reuniones de personas pretendan lograr la difusión, recepción y entrega de formatos de firmas de apoyo ciudadano;
- Que se emitan lineamientos para llevar todo el procedimiento del REFERÉNDUM ante el IEEBC, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones o audiencias virtuales, que permitan la participación de la ciudadanía mediante medidas tecnológicas, buscando el cumplir con las medidas de salud y sana distancia, a efecto de evitar contagios y muertes por Covid-19."

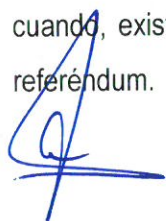
Con base en lo anterior, y

## CONSIDERANDO

### I. COMPETENCIA.

1. Que este *Consejo General* es competente para aprobar la ampliación del plazo previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*, relativo al plazo para la presentación de una solicitud de referéndum constitucional ante el *Instituto Electoral*.

2. Lo anterior, con apoyo en lo previsto en los artículos 26 y 50, inciso a), de la *Ley de Participación Ciudadana*, que prevén que el *Consejo General* es el órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de referéndum, y además de estar facultado para ampliar los plazos y términos previstos en la ley cuando, exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos para el proceso de referéndum.





## II. MARCO JURÍDICO APLICABLE.

### “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. Así, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

3. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado C, Numeral 9 de la *Constitución General*, las elecciones locales en las entidades federativas estarán a cargo de **organismos públicos locales** y que además **cuentan con la facultad de ejercer funciones de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.**

### “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”

4. Que el artículo 12, párrafo 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé que entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

### “Declaración Universal de los Derechos Humanos”

5. Que el artículo 25, párrafo 1, primera parte, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

**“Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”**

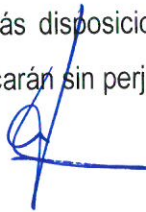
6. Que el artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar, entre otras, las medidas para garantizar este derecho, como son la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, así como la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud.

**“Ley General de Salud”**

7. Que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, y este derecho tiene, entre otras, las siguientes finalidades: el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, y la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, según se prevé en los artículos 1 y 4, fracciones I, IV y VIII, del referido ordenamiento legal.

8. Por otra parte, el artículo 140 de la Ley General de Salud dispone que, **las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias**, sin contravenir las disposiciones de la propia Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.

9. Así mismo, prevé el diverso 402 de la Ley General de Salud que, se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren.





10. En ese sentido, el artículo 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, de la Ley General de Salud disponen, en lo conducente, que las medidas de seguridad sanitaria, entre otras, son: el aislamiento; la cuarentena; la observación personal; la vacunación de personas; la suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio y las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.

11. Así, los artículos 411 y 415 de la Ley General de Salud, señalan que las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas, y que la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio, se ordenará, previa la observancia de la garantía de audiencia y de dictamen pericial, cuando, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se considere que es indispensable para evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas.

#### **“Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”**

12. Que el artículo 5, Apartado B, párrafo primero de la *Constitución Local*, establece que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado *Instituto Electoral*, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

13. Así mismo, establece como actividad que el *Instituto Electoral* desempeñará de forma directa e integral, entre otras, la siguiente:

#### **ARTÍCULO 5. ...**

[...]

#### **APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral.**

[...]

#### **VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;**



14. Por su parte, el Apartado C, de la citada disposición constitucional mandata, que los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así mismo que, la Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece la *Constitución Local*.

15. También, el artículo 7, Apartado A, párrafo séptimo de la *Constitución Local*, estatuye como derechos humanos de toda persona, entre otros, el correspondiente a la salud.

#### **“Ley Electoral del Estado de Baja California”**

16. Que, conforme con lo establecido en el artículo 35, de la Ley Electoral, son fines del Instituto Electoral, entre otros, los siguientes:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;
- II. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones.  
y
- III. **Realizar los procesos de consultar popular, plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia.**  
(énfasis añadido)

17. El *Consejo General* es el órgano superior de dirección del *Instituto Electoral*, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas sus actividades, como se establece en el artículo 37 de la *Ley Electoral*.

18. Además, dentro del marco competencial del *Consejo General*, el artículo 46, fracción II, de la *Ley Electoral*, establece como parte de sus atribuciones el expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ley.





19. Por último, el artículo 47, fracción XI, de la *Ley Electoral*, indica que es atribución del Consejero Presidente turnar a la Comisión competente aquellos asuntos que por la urgencia de su resolución así lo requieran.

**“Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California”**

20. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana son los siguientes:

- a) Plebiscito;
- b) **Referéndum;**
- c) Iniciativa Ciudadana,
- d) Consulta Popular, y
- e) Presupuesto Participativo.

21. Precisando que los principios rectores de la participación ciudadana son la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad y la equidad.

22. Por su parte, el artículo 3 de la *Ley de Participación Ciudadana* precisa que, la aplicación y ejecución de las normas contenidas en esa ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden, entre otros, al *Instituto Electoral*. Además, dispone que para el desempeño de sus funciones el Instituto Electoral ejercerá aquellas atribuciones y facultades que les otorgan otras leyes, siempre que no se contrapongan a esta Ley.

23. Por otro lado, indica el artículo 5 de la *Ley de Participación Ciudadana* que, a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en la *Ley Electoral*, en los acuerdos del *Consejo General* dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal de Justicia Electoral del Estado y a los principios generales del derecho.

24. Por su parte, el artículo 24 de la *Ley de Participación Ciudadana* define que, el referéndum es el proceso mediante el cual las y los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo, entre otras, a modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Local que sean trascendentes para la vida pública del Estado.

25. También, señalan que el *Consejo General*, es el órgano responsable de la organización y desarrollo de los procesos de referéndum, así como la autoridad competente para calificar su procedencia y eficacia, efectuar el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos necesarios, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la *Ley de Participación Ciudadana*.

26. Es así, que el referéndum constitucional puede ser solicitado, entre otros, por las y los ciudadanos que representen cuando menos el 1.5 % de la Lista Nominal de Electores en el Estado, según dispone el artículo 29, fracción III, de la *Ley de Participación Ciudadana*.

27. Así, el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana* dispone que, la solicitud de referéndum constitucional se deberá presentar ante el Instituto Electoral dentro de los treinta días hábiles a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la norma que se pretenda someter a consulta.

28. De modo que, el artículo 50 de la *Ley de Participación Ciudadana*, señala que el *Consejo General* tiene facultades para ampliar los plazos y términos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana cuando:

- a) Exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos para el proceso de referéndum, o
- b) Resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas etapas del proceso de referéndum.

29. Indicándose que el acuerdo o acuerdos del *Consejo General* que determinen ampliaciones a los plazos y términos de los procesos mencionados, deben ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación.

### III. RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN.

1. Previo a exponer las razones que justifican el acuerdo en cuanto al fondo, es importante precisar que, si bien la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica cuenta con las atribuciones para conocer y dictaminar los asuntos relacionados con los instrumentos de participación ciudadana, en el caso particular que nos ocupa, existe la urgencia de resolver en breve término la consulta formulada por el colectivo de personas denominado "Ciudadanos en Movimiento X BC".





2. Lo anterior es así, dado que, dado que como se indica en el antecedente 17 de este Punto de Acuerdo, se recibió el escrito referido, cuyo vencimiento del plazo legal para presentar la solicitud de referéndum constitucional respecto del decreto número 74 emitido por H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado, es el próximo 18 de agosto, por lo que es importante que el pleno del Consejo General emita una determinación sobre la petición del referido colectivo antes de la fecha límite.

3. Así, como quedó expuesto el grupo de personas referido en el párrafo anterior presentó ante este *Instituto Electoral* un escrito en el que sustancialmente, señalaron lo siguiente:

- a) Interés de promover un referéndum constitucional sobre el Decreto 74 del Congreso del Estado de Baja California, mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 16 de junio del presente año;
- b) Imposibilidad de recolectar el apoyo ciudadano requerido por la *Ley de Participación Ciudadana*, con motivo de la pandemia del COVID-19;
- c) No corra el computo de los 30 días previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana* hasta en tanto se decrete y autorice por las autoridades de salud, la posibilidad de que los ciudadanos puedan asociarse libremente y sin restricciones por motivos de la pandemia;
- d) Se considere implementar medidas tecnológicas para recabar firmas, y así ayudar a cumplir con las medidas de salud, evitando contagios o muertes por COVID-19;
- e) Se emitan lineamientos para llevar todo el procedimiento de referéndum, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones o audiencias virtuales, a efecto de evitar contagios y muertes por COVID-19.

4. A efecto de dar respuesta puntual a los planteamientos formulados por el grupo de personas, es necesario establecer una serie de consideraciones previas, en los términos siguientes:

**A. Emergencia sanitaria producida por el COVID-19.**

5. Como ha quedado asentado en el antecedente 7 del presente documento, actualmente el mundo entero se encuentra expuesto a una epidemia generada por el brote de COVID-19, debido a la cantidad de países afectados y la cantidad de contagios detectados, según lo señala la Organización Mundial de la Salud.

6. En consonancia con lo anterior, el Gobierno de México determinó el COVID-19 como una enfermedad de atención prioritaria, y posteriormente el Consejo de Salubridad General decretó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, derivada del virus COVID-19 en todo el país.

7. Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dictó una serie de medidas extraordinarias para mitigar el contagio y la propagación del COVID-19, tal como quedaron expuestas en el antecedente 12 de presente Punto de Acuerdo, destacando la relacionada con la suspensión de las actividades de orden público, privado y social que no resulten esenciales, en términos de lo señalado por la Secretaría de Salud, dentro de esta suspensión destacan las encuestas y censos que invariablemente implican una movilización de personas.

8. Es así que, conforme al avance de la pandemia la Secretaría de Salud del Gobierno de México como instancia facultada por el Consejo de Salubridad General implementó una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa.

9. Y posteriormente, derivado de la estrategia aludida en el párrafo anterior, el Consejo de Salubridad General acordó que se reanudarán las encuestas y censos en todo el país, para lo cual se debía observar el Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en la generación de Información Estadística y Geográfica emitido por la Secretaría de Salud.

10. Destaca dentro del contenido del Lineamiento General citado, el contenido del apartado 3 intitulado "*Medidas de Prevención en Campo*", el cual totalmente establece que, **estas medidas disminuyen la velocidad de transmisión o contagio, su objetivo primordial es incrementar la protección del personal que realiza labores operativas, principalmente aquellas que recorren el territorio nacional para recabar información estadística de diversas índoles.**





**B. Derecho a la salud.**

11. Que, de conformidad con lo expuesto previamente en el marco normativo, tenemos que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la *Constitución General* y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

12. Las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar conforme con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

13. Así, encontramos que el derecho a la salud previsto en la *Constitución General* implica obligaciones positivas para las autoridades, ya que requiere que se asegure asistencia médica y también obligaciones negativas de no hacer, es decir, evitar dañar la salud.

14. La salud tiene una dimensión individual y otra social<sup>1</sup>, en el aspecto individual es la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona.

15. Por otro lado, en la faceta social o pública, este derecho comprende el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, para lo cual debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.

16. En esta dimensión colectiva del derecho a la salud necesariamente deben considerarse aquellos factores sociales que la pueden poner en riesgo como son las pandemias.

17. En este sentido, la protección del derecho a la salud entraña obligaciones para todas las autoridades del país, acorde a lo que dispone el artículo 1 de la *Constitución General*, por lo que, deben velar por evitar amenazas a este derecho.

---

<sup>1</sup> Véase la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL". Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, p. 486.

18. Lo anterior, encuentra apoyo en lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio electoral identificado con la clave SUP-JE-30/2020, en el que se analizó si la pandemia del COVID-19 facultaba a un Tribunal Local para tomar medidas extraordinarias respecto de la tramitación medios de impugnación.

19. En efecto, como se expuso en el marco jurídico, el *Instituto Electoral* como máxima autoridad en la materia en el Estado, tiene el deber de garantizar, por una parte, los derechos político electorales de las ciudadanas y ciudadanos y, por otra parte, el derecho a la salud, tanto de las y los servidores públicos como de la ciudadanía en general.

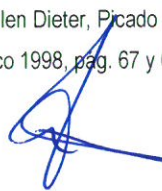
20. De esta forma es evidente que, si bien la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos político-electorales revisten la mayor importancia en la consolidación de la vida democrática del Estado, las circunstancias excepcionales de carácter mundial, nacional y estatal que se viven actualmente en materia de salubridad, también imponen la obligación de cumplir el derecho a la salud, para lo cual debe buscarse la coexistencia de ambos derechos.

### **C. Procedimiento para la tramitación de un referéndum constitucional por parte de las y los ciudadanos.**

21. Que en primer término, es necesario destacar que debemos entender por instrumentos de democracia directa, para ello es necesario retomar lo expresado por Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto<sup>2</sup>, cuando señalan que el concepto de "instituciones de democracia directa" se refiere a aquellas formas de participación política que se realizan con el voto directo y universal, pero que no consisten en seleccionar a los miembros de los órganos democrático-representativos, sea el legislativo (congreso o parlamento) o sea el ejecutivo (presidencia).

22. De acuerdo con lo anterior, y tal como ya se expuso en el marco normativo aplicable de este Punto de Acuerdo, la *Ley de Participación Ciudadana* reconoce una serie de instituciones de democracia directa, las cuales tanto autoridades como ciudadanía pueden impulsar para buscar someter a la voluntad popular actos, normas o decisiones políticas.

<sup>2</sup> Nohlen Dieter, Picado Sonia y Zovatto Daniel. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1998, pag. 67 y 68.





**23.** Cabe destacar, que dentro de los diversos mecanismos de participación ciudadana existen connotaciones especiales para la tramitación de cada uno de ellos, en el caso que nos ocupa nos centraremos en las características relacionadas del referéndum cuando este se promueve por la ciudadanía.

**24.** Cuando se trata de la promoción de un referéndum, la ley precisa un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la norma en el Periódico Oficial del Estado para que la solicitud se presente ante el *Instituto Electoral*.

**25.** Así, acorde con la ley citada, esta reconoce un procedimiento constituido por tres momentos procedimentales para determinar la procedencia o improcedencia de una solicitud de referéndum, que se constituye de la forma siguiente:

- 1) Se debe realizar la validación de los elementos objetivos de la solicitud de referéndum;
- 2) Determinar si la solicitud cumple con el elemento subjetivo, consistente en la trascendencia de la norma, y
- 3) Acordar la declaración de la procedencia o improcedencia de la solicitud.

**26.** Lo cual guarda congruencia y sentido con lo resuelto en la propia sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado Baja California dentro del Recurso de Inconformidad identificado con la clave RI-33/2018 y su acumulado RI-39/2018, en la que se determina puntualmente lo siguiente:

"Conforme a lo anterior, la Ley de Participación prescribe un procedimiento que consta de tres momentos para establecer la procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito, siendo estos: a) La validación de los requisitos objetivos de la solicitud de plebiscito; b) Determinar si la solicitud cumple con el elemento subjetivo, consistente en la trascendencia del acto, y c) Acordar la procedencia o improcedencia de la solicitud".

**27.** En este sentido, tenemos que para activar el primer momento a que se ha hecho referencia es necesario que se formule ante el *Instituto Electoral* una solicitud, misma que debe cumplir con una serie de requisitos objetivos.



28. Uno de los requisitos objetivos, tratándose de la solicitud que formulen las y los ciudadanos, consiste en el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano que respalden la solicitud referéndum, la cual tratándose de uno de carácter constitucional debe respaldarse por al menos el 1.5% de personas inscritas en el Listado Nominal de Electoral del estado.

29. Esta captación de apoyo ciudadano, de conformidad con las disposiciones legales establecidas en la *Ley de Participación Ciudadana*, se realiza a través del uso de papel, para lo cual las personas interesadas deben recolectar en un formato impreso diversos datos de las personas que apoyen su solicitud, como son: nombre completo, firma, clave de elector y estampar su firma autógrafa en el formato oficial. Lo anterior, sin lugar a dudas implica que las personas interesadas en promover una solicitud de instrumento de participación ciudadana realicen una movilización indeterminada de personas.

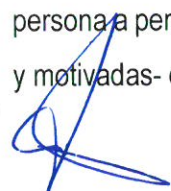
**D. Inviabilidad de la solicitud de suspender el plazo previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*.**

30. Con base en lo expuesto en los apartados A, B y C, de este considerando III, se pone de manifiesto que para este Consejo General no existen elementos suficientes para decretar una medida que implique la suspensión del plazo de treinta días hábiles previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*, de acuerdo con los razonamientos que se exponen a continuación.

31. En la medida que el mundo incrementa las respuestas de salud pública a la pandemia de COVID-19, se ha instado a los países a tomar acciones decisivas para controlar dicho padecimiento y a adoptar un enfoque integral contextualizado a sus circunstancias particulares, preferentemente, con un enfoque de contención en la propagación del virus.

32. En ese sentido, dadas las condiciones actuales de nuestro país, es necesario garantizar que la respuesta se base firmemente en las decisiones oportunas y preventivas que tomen las instituciones gubernamentales.

33. Sobre todo, considerando la información que ha venido proporcionando la Secretaría de Salud del Gobierno de México en cuanto a que, la transmisión del COVID-19, se produce de una manera casual de persona a persona; por tal motivo, las instituciones gubernamentales deben ir tomando decisiones -fundadas y motivadas- que estimen pertinentes dada la situación de emergencia que se vive.





34. Así, la participación política tanto de los ciudadanos como de las asociaciones es un principio fundamental de los derechos humanos que, debe sujetarse a las acciones y decisiones gubernamentales y éstas a la par, deben permitir continuar con participación directa y significativa en los procesos democráticos, generando un escenario que implique la menor movilidad de las personas.

35. Sentado lo anterior, es claro que este *Instituto Electoral* como autoridad encargada de garantizar los derechos político electorales de las y los ciudadanos, debe asumir sus determinaciones apegada al principio de legalidad, y consciente de la situación extraordinaria que impera en el país por causa de fuerza mayor a causa del COVID-19.

36. Así, es un hecho notorio y público que el mes pasado las autoridades sanitarias a nivel federal acordaron autorizar la reanudación de todas las encuestas y censos en el país, bajo la observancia de determinados lineamientos.

37. Destaca esta determinación, en virtud de que la actividad de aplicación de encuestas y censos implica mayormente la movilización de personas y el contacto cercano con estas, lo cual guarda una estrecha similitud con las actividades que deben desarrollarse para la captación del respaldo ciudadano de una solicitud promovida por la ciudadanía para la instrumentación de un referéndum.

38. Consciente la autoridad sanitaria de que la emergencia sanitaria no ha cesado totalmente, emitió el Lineamiento General para la Mitigación y Prevención del COVID-19 en la Generación de Información Estadística y Geográfica, con la finalidad de guiar al personal que participa en programas de generación de información estadística y geográfica sobre las medidas que habrán de adoptarse para la protección de la salud. Particularmente en el tercer apartado, se presentan las medidas específicas a implementar durante la fase de captación, sea en viviendas particulares o colectivas, así como las recomendaciones para la captación de información en campo en unidades económicas.



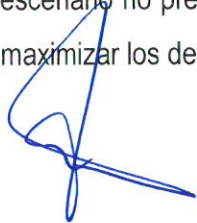
39. Aunado a lo anterior, de la lectura del escrito presentado por los promoventes se desprende que estos han recada una cantidad considerable de firmas, las cuales alcanzan la cantidad de 20 mil firmas aproximadamente, lo cual sin duda pone de relieve que las actividades tendientes para la captación de apoyo ciudadano se han venido realizando en los términos que prevé la ley.

40. De ahí que, no resulte viable adoptar la petición planteada por los promoventes, puesto que no existen elementos para suspender los plazos relativos a la presentación de una solicitud de referéndum, ya que como ha quedado claro, las autoridades sanitarias han ordenado la reanudación de actividades que guardan una estrecha similitud con las que se despliegan para captar apoyo ciudadano, y para lo cual existe un documento oficial emitido por las autoridades sanitarias, que establece las medidas que deben adoptarse para desarrollar actividades en campo que impliquen el contacto con personas, a fin de evitar el contagio de COVID-19.

**E. Ampliación del plazo previsto en el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana, como medida idónea para garantizar el derecho de las personas para participar en los asuntos públicos del Estado.**

41. En virtud de que se ha determinado como improcedente la petición de suspensión del plazo solicitada, este *Consejo General* con el objeto de salvaguardar los principios de legalidad y certeza que rigen el actuar del *Instituto Electoral* y tomando en consideración que subsiste en el país y principalmente en el Estado la situación de emergencia sanitaria, y siendo sensible al contexto actual, y privilegiando en todo momento el derecho de político electoral de voto activo, así como la salud de todas aquellas personas que participan en los diferentes procesos que implican la interacción entre la ciudadanía para la captación del respaldo ciudadano que apoye una solicitud de instrumento de participación ciudadana, determina idóneo adoptar como medida extraordinaria la ampliación del plazo previsto en el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana.

42. En este contexto, la decisión que se pretende asumir de ampliar el plazo referido está plenamente justificada, pues es notorio que ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y el Estado mismo, ha existido una imposibilidad material para que en un plazo de treinta días hábiles se recolecte el apoyo ciudadano exigido por la *Ley de Participación Ciudadana*, pues es indubitable que nos encontramos ante un escenario no previsto por el legislador, es decir, una situación extraordinaria, razón por la que a efecto de maximizar los derechos de los promoventes lo procedente es conceder una ampliación del plazo.





43. Sentado lo anterior, se propone que la ampliación aludida se establezca por un plazo adicional de 30 días hábiles, en función de lo siguiente:

- a) La emergencia sanitaria fue declarada por la autoridad sanitaria competente el pasado mes de marzo;
- b) La norma que se pretende someter a referéndum fue publicada en el periódico oficial del estado el pasado 16 de junio de 2020;
- c) La autoridad sanitaria autorizó la reanudación de censos y encuestas en todo el país el pasado 17 de julio de 2020,
- d) Del 16 de junio al 17 de julio han transcurrido un total de 23 días hábiles, lo que corresponde a más del 50% del plazo concedido por la ley, y
- e) La emergencia sanitaria no ha concluido.

44. Como se puede advertir de los incisos anteriores, el plazo para recolección de apoyo ciudadano ha transcurrido casi en su totalidad bajo el estado de emergencia sanitaria, y fue apenas hasta el mes de julio pasado, cuando la autoridad de salud determinó reanudar las actividades de campo en censos y encuestas en todo el país; por tanto, es válido que atendido al *principio pro persona*, y brindando la protección más amplia a los derechos político electorales de los promoventes, se conceda un plazo adicional de 30 días hábiles para llevar a cabo la recolección del apoyo ciudadano exigido por la *Ley de Participación Ciudadana* para la tramitación de un referéndum constitucional.

45. Justifica lo anterior, el contenido del artículo 1º, párrafo segundo, de la *Constitución General*, que mandata que todas las autoridades del país están obligadas a brindar la protección más amplia a las personas cuando se trate sobre la aplicación de normas relativas a los derechos humanos, mismas que deben interpretarse de conformidad con la propia constitución y los tratados internacionales de la materia; esto es, el llamado *principio pro persona*. De ahí que, es inconcuso que este Instituto Electoral debe brindar la protección más amplia a ese derecho, lo cual se produce con la ampliación del plazo multicitado.

46. Además, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en la propia *Constitución General*, debe tenerse presente que el propio marco jurídico previsto en la *Ley de Participación Ciudadana*, señala que, el *Instituto Electoral*, a través del *Consejo General* está dotado de facultades para ampliar los plazos y términos de dicha ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades

o actos previstos para el referéndum. Es así que, con apoyo en lo expuesto, la presente ampliación de plazo de 30 días hábiles encuentra plena justificación legal y material.

**F. Improcedencia de la implementación de tecnologías de la información para la captación de apoyo ciudadano respecto de la solicitud de referéndum que pretenden promover el grupo de ciudadanas y ciudadanos peticionarios.**

47. Como previamente se indicó, este *Consejo General* estima improcedente decretar una suspensión del plazo previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*, y considera idóneo que se determine ampliar el plazo de previsto en el artículo aludido por un periodo de 30 días hábiles más.

48. Así, no es materialmente posible para este *Instituto Electoral* adoptar el uso de una solución tecnológica para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para los promoventes, toda vez que, al no determinarse la suspensión solicitada, esta autoridad no cuenta con los elementos presupuestales, técnicos y humanos para desarrollar una solución de esa naturaleza en un tiempo demasiado breve.

49. Por otro lado, es importante destacar que si bien actualmente no se cuenta con una solución tecnológica para facilitar el trámite de los instrumentos de participación ciudadana previstos en la *Ley de Participación Ciudadana*, este *Instituto Electoral* ha buscado generar comunicaciones con el Instituto Nacional Electoral, a efecto de conocer si la solución tecnológica desarrollada por esa autoridad, es factible de utilizarse para la captación de apoyo ciudadano en los instrumentos de participación ciudadana que se pretendan promover ante el *Instituto Electoral*.

50. No obstante, dado el complejo entramado legal previsto en la *Ley de Participación Ciudadana* para la tramitación de un instrumento de participación ciudadana, la solución tecnológica creada por el Instituto Nacional Electoral no es compatible con el modelo previsto por legislador.

51. Lo anterior, toda vez que la solución tecnológica creada por el Instituto Nacional Electoral está construida bajo la premisa de un acto previo que comunica la intención de desarrollar determinado acto, concretamente para el proceso de construcción de una candidatura independiente, donde existe un acto previo a la puesta a disposición de la solución tecnológica, que es la manifestación de intención de la persona aspirante, acto previo que no existe en la *Ley de Participación Ciudadana*, pues la ciudadanía interesada debe acudir por





primera vez al *Instituto Electoral* una vez que ya recolectó el apoyo ciudadano a presentar la solicitud formal, es decir, no existe ese momento previo que haría las veces de un “*aviso de intención*”, lo que sin duda no permite establecer condiciones de certeza respecto del uso de la solución tecnológica indicada en los términos que el Instituto Nacional Electoral concede su uso. De ahí que, el uso de esta solución tecnológica no pueda implementarse como medio para la captación de apoyo ciudadano para la tramitación de un instrumento de participación ciudadana.

**52.** Ahora bien, por cuanto hace a la solicitud de implementar tecnologías de la información para la celebración de audiencias, reuniones y sesiones, de forma virtual, debe estarse a lo señalado en el antecedente 13 de este Punto de Acuerdo, en el que se señala que este *Consejo General* autorizó que todos los órganos colegiados del Instituto Electoral celebren sus eventos a través del uso de herramientas informáticas.

#### **IV. EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN.**

- 1.** La ampliación del plazo al artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana* que se pretende adoptar con este Punto de Acuerdo se computará de la siguiente forma: se amplía el plazo por 30 días hábiles adicionales contados a partir del día hábil siguiente en que fenezca el plazo originalmente previsto en el referido artículo 30 de la citada ley.
- 2.** Esto es, partiendo del hecho notorio y público consistente en que el pasado 16 de junio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 74 del Congreso del Estado por el que se realizaron diversas reformas a la *Constitución Local*, y tal como se precisó en el antecedente 6 de este documento, el *Consejo General* determinó que el periodo comprendido del 20 de julio al 7 de agosto sería considerado como días inhábiles para la tramitación de cualquier tipo de procedimiento que no estuviera ligado a un proceso electoral, en virtud de tratarse del primer periodo vacacional del personal del *Instituto Electoral*.
- 3.** Así, tenemos que el plazo de 30 días hábiles previsto en el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana para la presentación de alguna solicitud de referéndum constitucional sobre el señalado Decreto 74, se computó de la siguiente manera:





JUNIO						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		16 Publicación del Decreto 74	17 [Día 1] Inicio de plazo	18 [Día 2]	19 [Día 3]	20 <i>Día inhábil</i>
21 <i>Día inhábil</i>	22 [Día 4]	23 [Día 5]	24 [Día 6]	25 [Día 7]	26 [Día 8]	27 <i>Día inhábil</i>
28 <i>Día inhábil</i>	29 [Día 9]	30 [Día 10]				
JULIO						
			1 [Día 11]	2 [Día 12]	3 [Día 13]	4 <i>Día inhábil</i>
5 <i>Día inhábil</i>	6 [Día 14]	7 [Día 15]	8 [Día 16]	9 [Día 17]	10 [Día 18]	11 <i>Día inhábil</i>
12 <i>Día inhábil</i>	13 [Día 19]	14 [Día 20]	15 [Día 21]	16 [Día 22]	17 [Día 23]	18 <i>Día inhábil</i>
19 <i>Día inhábil</i>	20 <i>Día inhábil</i>	21 <i>Día inhábil</i>	22 <i>Día inhábil</i>	23 <i>Día inhábil</i>	24 <i>Día inhábil</i>	25 <i>Día inhábil</i>
26 <i>Día inhábil</i>	27 <i>Día inhábil</i>	28 <i>Día inhábil</i>	29 <i>Día inhábil</i>	30 <i>Día inhábil</i>	31 <i>Día inhábil</i>	
AGOSTO						
						1 <i>Día inhábil</i>
2 <i>Día inhábil</i>	3 <i>Día inhábil</i>	4 <i>Día inhábil</i>	5 <i>Día inhábil</i>	6 <i>Día inhábil</i>	7 <i>Día inhábil</i>	8 <i>Día inhábil</i>
9 <i>Día inhábil</i>	10 [Día 24]	11 [Día 25]	12 [Día 26]	13 [Día 27]	14 [Día 28]	15
16	17 [Día 29]	18 [Día 30] Vencimiento de plazo	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

4. En ese orden, la ampliación propuesta iniciará su vigencia a partir del día hábil siguiente al diverso en que fenece el plazo originalmente concedido por el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*; esto es, a partir del 19 de agosto y concluiría el próximo 1 de octubre de 2020, tal como se ilustra enseguida:

AGOSTO						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			1	2	3	1 <i>Día inhábil</i>
2 <i>Día inhábil</i>	3	4	5	6	7	8 <i>Día inhábil</i>
9 <i>Día inhábil</i>	10	11	12	13	14	15 <i>Día inhábil</i>
16 <i>Día inhábil</i>	17	18	19 [Día 1] Inicio de ampliación de plazo	20 [Día 2]	21 [Día 3]	22 <i>Día inhábil</i>
23 <i>Día inhábil</i>	24 [Día 4]	25 [Día 5]	26 [Día 6]	27 [Día 7]	28 [Día 8]	29 <i>Día inhábil</i>
30 <i>Día inhábil</i>	31 [Día 9]					
SEPTIEMBRE						
		1 [Día 10]	2 [Día 11]	3 [Día 12]	4 [Día 13]	5 <i>Día inhábil</i>
6 <i>Día inhábil</i>	7 [Día 14]	8 [Día 15]	9 [Día 16]	10 [Día 17]	11 [Día 18]	12 <i>Día inhábil</i>
13 <i>Día inhábil</i>	14 [Día 19]	15 [Día 20]	16 <i>Día inhábil</i> *	17 [Día 21]	18 [Día 22]	19 <i>Día inhábil</i>
20 <i>Día inhábil</i>	21 [Día 23]	22 <i>Día inhábil</i> *	23 [Día 24]	24 [Día 25]	25 [Día 26]	26 <i>Día inhábil</i>
27 <i>Día inhábil</i>	28 [Día 27]	29 [Día 28]	30 [Día 29]			



OCTUBRE						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1 [Día 30] Vencimiento de ampliación de plazo		
* Días inhábil en términos del artículo 30, numeral 5, de la Ley del Servicio Civil de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.						

5. Por otro lado, dentro de los tres días siguientes a su aprobación por el *Consejo General* el presente Punto de Acuerdo se enviará al Periódico Oficial del Estado para su publicación, en los términos que dispone el último párrafo del artículo 50 de la *Ley de Participación Ciudadana*.

6. El grupo de personas promoventes deberá observar el Apartado 3 del Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en generación de Información Estadística y Geográfica<sup>3</sup> emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, para el desarrollo de sus actividades tendientes a la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el referéndum que pretenden promover, y

7. Por último, con esta determinación se da respuesta de forma íntegra a la solicitud presentada por las y los ciudadanos referidos en el antecedente 17 de este Punto de Acuerdo.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, este *Consejo General* emite los siguientes:

## ACUERDOS

**PRIMERO.** Es improcedente la petición formulada por el colectivo denominado "Ciudadanos en Movimiento X BC", en relación con la suspensión del plazo previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*, así como la adopción de herramientas tecnológicas para la recolección de firmas de apoyo ciudadano, de conformidad con lo expuesto en el considerando III del presente Punto de Acuerdo.

<sup>3</sup> Consultable en: [https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Lineamiento\\_para\\_mitigacion\\_COVID19\\_InfoEyG\\_GENERICO.pdf](https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Lineamiento_para_mitigacion_COVID19_InfoEyG_GENERICO.pdf)

**SEGUNDO.** Se aprueba la ampliación del plazo previsto en el artículo 30 de la *Ley de Participación Ciudadana*, para la presentación, en su caso, de la solicitud o las solicitudes de referéndum constitucional sobre el Decreto número 74, emitido por la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 16 de junio de 2020, por un periodo de treinta días hábiles, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV 2 (COVID-19), en términos de los considerandos III y IV del presente Punto de Acuerdo.

**TERCERO.** Se exhorta a las ciudadanas y ciudadanos interesados en recabar firmas de apoyo ciudadano para la integración de la solicitud de referéndum constitucional, observen el apartado 3 del Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en generación de Información Estadística y Geográfica emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

**CUARTO.** El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día de su aprobación por el Consejo General.

**QUINTO.** A efecto de que el presente Punto de Acuerdo surta los efectos legales conducentes, la *Secretaría Ejecutiva* deberá notificar a los peticionarios integrantes del colectivo "Ciudadanos en Movimiento X BC", el contenido del mismo por Estrados, en virtud de no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, deberá instruir lo conducente, para que se publique este Punto de Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el portal de internet institucional del *Instituto Electoral*, dentro del término dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la *Ley de Participación Ciudadana*.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte.

**ATENTAMENTE**

"Por la Autonomía e Independencia  
de Los Organismos Electorales"



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA

**C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA**  
**CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL**